

C.A. de Concepción

Concepción, veinticinco de marzo dos mil veinticinco.

Vistos:

La demandante en autos RIT O-108-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, recurre de nulidad en contra de la sentencia definitiva de 26 de agosto de 2024, rectificadora dos días después, y que acoge parcialmente su demanda, sin costas.

La defensa de la actora invoca el motivo de nulidad establecido en el artículo 477, segunda parte, del Código del Trabajo, en diversas hipótesis, y formula las peticiones concretas que indica.

Se procedió a la vista del recurso en la audiencia de estilo, a la que asistieron y alegaron los abogados de las partes.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO.- Que la sentencia definitiva recurrida, decidió:

I.- Que se rechazan las excepciones de incompetencia y de prescripción;

II.- Que **se acoge** la demanda incoada por Pedro Peña Sánchez, abogado, en calidad de mandatario judicial de doña Marcia Elizabeth Muñoz Muñoz, en contra de la Municipalidad de Penco, representada don Víctor Hugo Figueroa Rebolledo, sólo en cuanto se declara que entre las partes existió una relación laboral continua entre el 25/07/2005 al 29/12/2023, y que se condena a la demandada, producto del despido indirecto ejercido, al pago de las siguientes prestaciones, por los montos que en cada caso se indican:

1.- La cantidad de \$1.577.054 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo.

2.- La suma de \$17.347.594, por concepto de indemnización por 11 años de servicios.

3.- La cantidad de \$8.673.797, por concepto del recargo del 50% de la indemnización por años de servicio.

4.- Las sumas de \$105.136, por concepto de 2 días de feriado progresivo.

5.- La suma de \$442.096 por concepto de 8,41 días de feriado proporcional.

6.- La demandada deberá, además, enterar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas a la A.F.P Habitat, AFC Chile III S.A. y Fonasa en las condiciones señaladas en el motivo décimo séptimo de esta sentencia.

Las sumas antes indicadas deberán ser pagadas con más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 ó 173 del Código



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHFQXTEFXXX

del Trabajo, según corresponda.

III.- Que se desestima en lo demás la referida demanda.

IV.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

La sentencia fue corregida mediante la resolución de 28 de agosto pasado (folio 68) en cuanto en su numeral “6.- *La demandada deberá, además, enterar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas a la A.F.P Habitat, AFC Chile III S.A. y Fonasa en las condiciones señaladas en el motivo **décimo sexto** de esta sentencia.*”

SEGUNDO.- Que el demandante recurrente invoca el motivo de nulidad establecido en el artículo 477, segunda parte, del Código del Trabajo, esto es: “*el haberse dictado el fallo con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo*”, solicita que se anule parcialmente la sentencia por haber incurrido en infracción de ley, al artículo 58 del Código del Trabajo en relación a los artículos 17 y 19 del DL 3.500; al artículo 5° del mismo código, en relación al artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, así como a los artículos 2° y 3° de la ley 21.409, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, anulando la sentencia parcialmente y se dicte sentencia de reemplazo, que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido indirecto, el pago de las prestaciones, los recargos legales, los intereses y reajustes legales, pero que condene al pago íntegro de las cotizaciones previsionales por todo el periodo demandado, así como a la compensación del descanso reparatorio.

Funda su primer motivo de nulidad en que el fallo infringe el artículo 58 del Código del Trabajo y los artículos 17 y 19 del DL 3500, por falsa aplicación de ley. Argumenta que la sentencia ha reconocido la existencia de una relación laboral, entre la actora y la Municipalidad de Penco y que no se han pagado las cotizaciones de seguridad social, por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y se ordene su pago. Al no condenar al pago de cotizaciones previsionales y habiéndose establecido que existieron sucesivos contratos de honorarios entre las partes, debió entonces el fallo aplicar el artículo 58 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 17 y 19 del DL 3500, condenando a la demandada al pago íntegro de todas las cotizaciones previsionales de la demandante, sin efectuar distinción si la demandada las retuvo o no.

Lo resuelto influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo puesto que no condena al pago íntegro de las cotizaciones durante todo el periodo que duró la relación laboral, aplicando una normativa



que no aplica al caso. De haberlo considerado, se hubiera condenado a la demandada al pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social de todo el periodo que duró la relación laboral.

Sostiene también que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 5° del Código del Trabajo y en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, por aplicación errónea. Sostiene que la demandada adeuda las cotizaciones de salud por todo el periodo trabajado y las cotizaciones previsionales a contar de marzo de 2014, por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y se ordene al pago de éstas. Argumenta que el fallo incurre en una falsa aplicación de ley, al dejar de aplicar dichas normas, según explica.

Argumenta además que el fallo infringe los artículos 2° y 3° de la ley N°21.409, por aplicación errónea. Añade que habiendo existido una relación laboral durante el periodo de aplicación de la Ley N°21.409 que “Establece un Descanso Reparatorio para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Salud”, su representada tenía acceso a los 14 días hábiles de descanso reparatorio referidos en su artículo 1°. Reconocida la relación laboral y acogido el despido indirecto, correspondía que la actora tuviera acceso a la compensación del descanso reparatorio, toda vez que el artículo 3° de la Ley N°21.409 asimila su solicitud y ejercicio a las normas del feriado legal. El artículo 73 del Código del Trabajo es claro que respecto a los días de descanso no gozados durante la vigencia del contrato, nace una acción de reembolso en dinero para el trabajador.

Lo resuelto influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues no se dio lugar al descanso reparatorio y de haberse considerado dichos argumentos, se hubiera “condenado a la demandada a la indemnización de los 14 días hábiles de descanso reparatorio” solicitada.

En forma simplemente conjunta, invoca la causal de nulidad, por infracción de ley, de los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, en cuanto a la sanción de la nulidad del despido por interpretación errónea. Solicita que se anule el fallo parcialmente y se dicte sentencia de reemplazo, que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido indirecto, el pago de las prestaciones, los recargos legales, los intereses y reajustes, pero que condene a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales por todo el periodo demandado y aplique la sanción de nulidad del despido.

Argumenta que el juez desglosa todo el razonamiento



conducente a tal declaración. No obstante, para efectos de la nulidad del despido -en el cual se verifica la infracción de ley de los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162- estimó que ésta no debe aplicarse por considerar que la norma está pensada para aquel empleador que retiene y no entera las cotizaciones, tal como se observa del considerando decimosexto, lo que resulta paradójico pues, por un lado, reconoce todos efectos de la declaración de la relación laboral y que no le fueron pagadas ni enteradas a la actora sus cotizaciones de seguridad social y, por otro lado, no acoge la demanda de nulidad del despido, que corresponde a la sanción al empleador negligente que no entera las cotizaciones previsionales de su trabajador. Añade que el artículo 162 del Código del Trabajo y los incisos referidos no establecen que la sanción de la nulidad del despido sólo es procedente cuando el empleador no es un organismo de la Administración del Estado o está amparada por una presunción de legalidad, según detalla.

En subsidio, invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse incurrido en infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo en cuanto no condena al pago de cotizaciones previsionales, se anule parcialmente el fallo por haber incurrido en infracción de ley al artículo 58 del Código del Trabajo, en relación al 17 y 19 del DL 3.500 y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido indirecto, el pago de las prestaciones adeudadas, los recargos legales, los intereses y reajustes legales, pero que condene a la demandada al pago íntegro de las cotizaciones previsionales por todo el período demandado.

Funda este capítulo de su recurso en que se ha establecido que existieron sucesivos contratos de honorarios entre las partes, que no se pagaron éstas durante la relación laboral, por lo que debió entonces aplicarse el artículo 58 del Código del Trabajo, en relación al artículo 17 y 19 del DL 3500, condenando a la demandada al pago íntegro de todas las cotizaciones previsionales de la actora, sin efectuar distinción si la demandada las retuvo o no y añade que de haberse considerado lo señalado, la decisión hubiera devenido en condenar a la demandada al pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social de todo el período que comprendió y duró la relación laboral.

TERCERO.- Que el recurso de nulidad es de derecho estricto y cuya finalidad depende de la causal de nulidad que se invoca. Su carácter de derecho estricto queda de manifiesto en la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de sus causales, en atención a la finalidad perseguida por ellas, situación que igualmente



determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la carga procesal de precisar con rigurosidad los fundamentos y peticiones concretas de las distintas causales de nulidad invocadas, según lo dispuesto en el artículo 478 inciso final del Código del Trabajo.

CUARTO.- Que la causal de nulidad de la sentencia invocada y establecida en la segunda parte del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, que “aquella se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, se configura si la ley se ha aplicado a casos no regulados por ella, si no se ha aplicado a los casos específicamente contemplados en ella o si, habiéndose aplicado, no lo ha sido en forma correcta; pero en todas estas hipótesis deben respetarse los hechos establecidos en el fallo recurrido, pues esta causal constituye únicamente un cuestionamiento al juzgamiento jurídico en que se sustenta la sentencia impugnada en cuanto a la elección de la norma aplicable a los hechos asentados en el proceso.

“En síntesis, se trata de una revisión exclusivamente del derecho aplicado al fallo, sin que, por esta vía, se puedan alterar los hechos que han quedado asentados en la sentencia recurrida” (G. Lanata F: “El sistema de recursos...”. Legal Publishing Chile, Santiago, 2011, pág: 166).

QUINTO.- Que son hechos de la causa y que constan en la sentencia definitiva impugnada, los siguientes: a) que la demandante efectivamente prestó servicios en su calidad de psicóloga para el Departamento de Salud Municipal de Penco, vínculo que se mantuvo vigente entre el 25/07/2005 y hasta el 29/12/2023 (motivo 8° 1); b) la actora “trabajó como coordinadora del Programa Habilidades para la Vida en vinculación con los establecimientos educativos de la comuna de Penco por más de **18** años, además de ejecutar otras labores propias de la administración municipal de la salud” (considerando 10); c) la trabajadora, mediante comunicación de 29/12/2023, dio aviso a la municipalidad de su decisión de poner término a su contrato mediante el mecanismo de “auto despido” del artículo 171 del Código del Trabajo, fundado en un incumplimiento grave de obligaciones contractuales que atribuye al empleador, causal del artículo 160 N°7 del mismo Cuerpo Normativo (fundamento 8°.2); y d) Acerca de las cotizaciones en “**AFP Habitat S.A.**”, la actora se encargó de pagar sus cotizaciones desde la suscripción de contrato correspondiente a **marzo de 2014**; además, del certificado aparecen pagadas por la propia trabajadora efectivamente en el período **01/2018 a 12/2023**, por lo



que se condenará a pagar al demandado las cotizaciones previsionales por el periodo anterior, es decir, del **07/2005** a **02/2014**, puesto que **marzo de 2014** en adelante, atendida la cláusula contractual reseñada precedentemente, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven son consecuencia del propio incumplimiento de la actora, por lo que, en el último periodo, no hay un daño previsional que pueda ser imputado a la demandada. Las cotizaciones de salud seguirán el mismo criterio.⁷

Respecto de las cotizaciones de cesantía en **AFC Chile III S.A.**, se condenará al demandado a pagar las cotizaciones por el período **07/2005** a **12/2023**, pero limitadas al porcentaje que es de cargo del empleador (**2,4%** de acuerdo a **artículo 5** de la **Ley 19.728**), y no el que corresponde solventar al trabajador con su patrimonio, porque, con ello, se configuraría un pago doble” (sic, motivo decimosexto).

SEXTO.- Que lo pretendido por la defensa de la recurrente a través de la causal de infracción de ley, en cualquiera de las hipótesis que plantea, y conforme a las que solicita que se condene a la demandada al pago íntegro de las cotizaciones previsionales por todo el período demandado, esto es, julio de 2005 a diciembre de 2023, conforme a la petición concreta de su recurso y a los fundamentos del mismo; no es que se efectúe un cuestionamiento al juzgamiento jurídico en que se sustenta el fallo impugnado en cuanto a la elección de la norma aplicable a los hechos asentados en el proceso, sino que una nueva valoración de los elementos de convicción para así obtener la modificación de los hechos acreditados, antes consignados y especialmente en cuanto a en que la actora enteró sus cotizaciones desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2023, y conforme a ello establecer que la demanda debe ser acogida en aquella parte que solicita el pago de las cotizaciones de la actora por todo el período que en aquella se señala. Estos estos aspectos, en cualquiera de las hipótesis de nulidad propuestas, son ajenos a la causal de ineficacia establecida en el artículo 477 del código del ramo, por lo que ella, en consecuencia, será desestimada.

SÉPTIMO.- Que en cuanto a la sanción de la nulidad del despido, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado en los términos del artículo 11 de la ley N°18.834, y conforme a lo ha resuelto reiteradamente el Máximo Tribunal, el fallo no incurre en la infracción de ley denunciada por la demandante; toda vez que en la especie concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la nulidad del despido regulada en el artículo 162 Incisos 5°, 6° y 7° del



Código del Trabajo, ya que los contratos de autos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la nulidad del despido.

Argumenta también la Corte Suprema, que la aplicación en estos casos de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido. Así, se ha resuelto desde antaño (V. gr. roles 20.008-2022, 98.552-2022); por lo que la causal de nulidad en análisis y en este extremo, también será desestimada.

OCTAVO.- Que acerca de la infracción a los artículos 2° y 3° de la ley N°21.409 que se denuncia, resulta ineludible que se estableció en el proceso que la demandante “trabajó como coordinadora del Programa Habilidades para la Vida en vinculación con los establecimientos educativos de la comuna de Penco por más de **18** años, además de ejecutar otras labores propias de la administración municipal de la salud” (considerando 10), es decir, en actividades administrativas, ajenas al universo de beneficiarios y los requisitos generales para acceder al descanso reparatorio para el personal de la salud que indica el artículo 2° de la ley N°21.409, en reconocimiento a la labor desempeñada durante la pandemia por COVID-19; lo que se corrobora con el establecimiento fidedigno de la historia de esta ley, pues la moción parlamentaria en torno a ella se fundó, en lo pertinente: *“en una importante carga laboral y estrés de los trabajadores de la salud, en establecimientos públicos y privados, además de la inevitable puesta en riesgo al contagio, de todos quienes conforman la estructura de atención, producto de su exposición al coronavirus a raíz del tratamiento prodigado a los pacientes”* (Primer Trámite Constitucional, Cámara de Diputados); de modo que el motivo de nulidad en análisis, en este extremo, tampoco puede ser acogido.

NOVENO.- Que la demandante ha tenido motivos plausibles para recurrir por lo que no será condenada en costas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo



previsto en los artículos 474, 477 y 481 del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa de la demandante en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, contenida en el folio 66, corregida por la resolución del día veintiocho de dicho agosto (folio 68); la que, en consecuencia, es válida.

Regístrese, devuélvase, notifíquese e insértese en la carpeta virtual.

Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular.

No firma el letrado Hugo Tapia Elorza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber cesado en su calidad de abogado integrante ante esta Corte de Apelaciones.

Rol Laboral-Cobranza 671-2024.-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHFQXTEFXXX

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministro Presidente Camilo Alejandro Álvarez O., Ministra Viviana Alexandra Iza M. y el Abogado Integrante Hugo Tapia E. Concepción, veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

En Concepcion, a veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHFQXTEFXXX